

Honduras: ¡y después de Zelaya, qué!

Ismael Moreno

El inesperado y sorprendente regreso de Zelaya a Honduras forzó al diálogo y aceleró las negociaciones. Ninguna nos sacará ni en el corto ni en el mediano plazo de las honduras en que nos ha sumergido este conflicto. Sólo un pacto social, basado en un proyecto de país, que incluya la demanda –que hoy ya es nacional–, de una Asamblea Constituyente, podría resultar beneficiosa tras esta tormentosa y costosísima etapa de la historia de nuestro país.

El 21 de septiembre representó un golpe de timón en el conflicto nacional que arrancó con el golpe de Estado del 28 de junio. En Radio Progreso, curtidos por la sospecha ante rumores que han ido y venido en un ambiente de inestabilidad y confrontaciones, recibimos la noticia de que el Presidente Zelaya estaba en la sede de la ONU en Tegucigalpa. Nos resistimos a divulgarla sin antes confirmarla.

Un periodista de la radio llamó a un alto funcionario de la ONU. «No sabemos nada. Le puedo asegurar con conocimiento de causa, porque tengo frente a mí al director de la sede: no es cierto que Zelaya vaya a venir por aquí». Pero la noticia seguía corriendo de boca en boca, de móvil en móvil. La ra-

dio decidió seguir con canciones latinoamericanas. Desde la calle, un grito fue un reclamo: ¡Informen a la gente! Otro periodista, con conexión directa con el Presidente derrocado, llamó a la radio

*temerosa por el desborde
de la resistencia interna
y para evitar nuevas
y desagradables sorpresas,
la dictadura decidió apretar
más las tuercas: expulsó del
país a la comisión técnica de
la OEA y negó el ingreso
a los embajadores europeos
que retornaban al país para
contribuir al proceso de
diálogo, medidas que dejaron
en evidencia su enorme
debilidad y desgaste*

y nos mostró el mensaje que el propio Zelaya puso en la pantalla de su móvil. El polémico hombre del sombrero le decía: «Sí, estoy en Honduras, en la embajada de Brasil. Lo puede difundir».

Radio Progreso lanzó la noticia al aire y unos minutos después el Presidente usurpador convocaba a una conferencia de prensa afir-

mando que era una noticia falsa que lanzaban los desesperados seguidores zelayistas. «Ese hombre está en una suite de un hotel de Managua. Lo acaba de confirmar mi equipo de inteligencia». Todo lo que sucedió después de tan ridícula intervención, es historia bien conocida.

Los objetivos de la oleada represiva

La euforia de los seguidores de Zelaya, y en general la de la resistencia hondureña en sus diversos dinamismos, duró muy poco, como «la alegría en la casa del pobre». El régimen golpista inició una escalada de represión, persecución y control como nunca se había experimentado en la historia del país. Ante las masivas movilizaciones en torno a la embajada brasileña, el régimen creó un cerco represivo y llegó al extremo de atacar con gases tóxicos la sede diplomática, implantando toques de queda continuos que finalmente cristalizaron en la aprobación, el domingo 27 de septiembre, de un Decreto Ejecutivo que estableció el estado de sitio.

En la tarde del día siguiente –lunes 28 de septiembre–, un grupo de policías se presentó en las instalaciones de Radio Progreso para entregar un comunicado que

debía difundirse con carácter obligatorio, según dijo el oficial responsable. El documento establecía que toda reunión pública sólo se podía realizar con aprobación de la policía y previa una solicitud hecha con 24 horas de antelación, especificando los nombres de las personas responsables de la actividad, motivo, horarios, lugar y cantidad de participantes. Advertía también que toda reunión en espacios cerrados como iglesias, salones o casas –se incluían fiestas– debían notificarse en la delegación policial más cercana. El Decreto Ejecutivo establecía el cierre de radioemisoras, publicaciones escritas y televisivas que dañaran la dignidad de los funcionarios públicos.

La ejecución de la medida fue precisa e inmediata. En la madrugada del lunes un operativo de la policía intervino violentamente Radio Globo y Canal 36, ambas en la capital, propiedad de reconocidos liberales zelayistas, con una programación volcada a atacar al régimen *de facto* y a apoyar las luchas de la resistencia nacional. «Y nos queda una emisora de la costa norte», dijo el ministro de gobernación *de facto*. «¿A cuál le caerán primero? ¿A Radio Progreso o a Radio Uno?», las únicas dos radios de la costa norte en plena oposición al golpe de Estado: la

nuestra en El Progreso y la otra en San Pedro Sula.

Pasó la semana y, a pesar de presiones, amenazas y tensiones, el cierre no se hizo efectivo. Temerosa por el desborde de la resistencia interna, y para evitar nuevas y desagradables sorpresas, la dictadura decidió apretar más las tuercas: expulsó del país a la comisión técnica de la OEA y negó el ingreso a los embajadores europeos que retornaban al país para contribuir al proceso de diálogo, medidas que dejaron en evidencia su enorme debilidad y desgaste. El objetivo específico de todas estas medidas era también eliminar a los medios de comunicación de la capital no controlados por el cerco mediático y con gran influencia en la resistencia que tenía sus ojos puestos en la embajada de Brasil, forzar a una negociación en condiciones favorables a los golpistas y presionar a los mediadores a identificar al régimen *de facto* como promotor y conductor de la iniciativa del diálogo.

Todos quieren dialogar

El retorno de Zelaya, burlando la inteligencia de la dictadura, presionó para la apertura de un diálogo que condujera a una negociación. Hasta su llegada esta posibilidad estaba atrapada en la

estrategia golpista de la dilación. El inesperado acontecimiento fortaleció la resistencia, provocó una respuesta represiva de la dictadura y obligó a reaccionar a los sectores nacionales que sostenían tras casi tres meses el golpe de Estado.

Una semana después del retorno de Zelaya habían presentado propuestas de diálogo los sectores empresariales, los candidatos de la derecha a la Presidencia de la República, la embajada de Estados Unidos y la jerarquía católica de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Cuando todo el mundo entendía que la mediación de la jerarquía capitalina estaba desacreditada, las cámaras comenzaron a señalar al obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, que entraba y salía de la embajada del Brasil. «Todo el mundo habla de diálogo, pero nadie lo hace realmente. He decidido ser el primero en dar el primer paso», dijo el obispo, seriamente cuestionado por analistas del país por sus íntimos vínculos con personalidades claramente identificadas con el golpe y comprometidas con muy bien documentados actos de corrupción.

Nadie pudo quedar al margen del nuevo dato, que estremeció tanto a los golpistas como a la resistencia popular. Unos por el interés genuino en contribuir a buscar una salida a una crisis que progre-

sivamente ha hundido al país, y la mayoría por capitalizar la oportunidad a favor de sus propias ventajas particulares, entraron todos a la onda del diálogo. Privó el interés oportunista de recuperar una imagen perdida o el de salir al paso ante futuras condenas o ajustes de cuentas o el de poner fin a una situación que está afectando severamente los negocios y el flujo e inversión de capitales. El propio negociador costarricense Óscar Arias quiso aprovechar el retorno de Zelaya para colocar nuevamente en la mesa de diálogo su propuesta, aplastada hasta ese día por la inercia dilatoria impuesta por los sectores golpistas.

Lo que quiere Micheletti

Quien mejor supo hacerle frente al retorno de Zelaya, fue el equipo que rodea a Roberto Micheletti. Agobiado por el aislamiento internacional, cercado por la resistencia interna y sometido al plazo fatal del 29 de noviembre para celebrar unas elecciones seriamente cuestionadas y ya con la advertencia de que serían desconocidas tanto por la comunidad internacional como por los diversos sectores y dinamismos de la resistencia, el equipo de Micheletti aprovechó el retorno de Zelaya para promover una negociación que le

Honduras: ¡y después de Zelaya, qué!

permitiera legitimar las elecciones generales, garantizarse una amnistía y suficiente base de poder para quedar protegido de demandas nacionales, y sobre todo internacionales, alcanzando arreglos con los candidatos presidenciales. Objetivo: mantenerse todos vivos en el engranaje estatal.

Lo que soñó erradamente Zelaya

Zelaya ha dado señales muy claras de ser un político aventado, experto en improvisar y en configurar un entorno según su «genio y figura», aunque con un análisis errado sobre la correlación de fuerzas, lo que le lleva a no atinar en sus cálculos. Así como se lanzó a la Cuarta Urna y hacia el camino de la Constituyente partiendo de un análisis que evidentemente superlativizó la capacidad de las fuerzas del movimiento popular, a la vez que restó peso a los grupos de poder que en la coyuntura golpista han demostrado sus enormes reservas y su capacidad destructiva. Cuando Zelaya decidió retornar al país, partió de otro análisis, con una muy débil lectura en torno a la composición de las fuerzas en juego en su ausencia.

Llevado por el entusiasmo y por tres meses de resistencia popular, el hombre del sombrero rompió con la inercia dilatoria impuesta

por los sectores golpistas, con la seguridad de que la población se volcaría hacia él y en hombros de las masas sería conducido a Casa Presidencial, obligando a Micheletti y a sus secuaces a retirarse.

el destierro de Zelaya y la instauración de un régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti era la primera etapa de un más amplio golpe de Estado en construcción; el segundo paso de este proceso serían las elecciones generales del 29 de noviembre, que legitimarían y consumarían lo ocurrido el último domingo de junio, los golpistas trabajaron sobre este plan

De inmediato se haría realidad la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Zelaya no se equivocó al calcular la reacción espontánea y entusiasta de la gente, que se aglomeró por decenas de miles en torno a la embajada brasileña. Pero sus

cálculos fallaron: esa población no tenía capacidad para hacer frente, con la misma persistencia y cantidad de personas, a la despiadada

los políticos y empresarios que se aliaron para dar el golpe de Estado tienen dos agujijones que los obligan a buscar con urgencia una salida: uno es el proceso electoral, convertirlo en una herramienta que los libre de cualquier amenaza a sus intereses; el otro agujijón es el económico, los empresarios están atenazados y el Estado se encuentra sin posibilidades de sacar adelante ningún proyecto económico.

Honduras vive en la exacta definición de la ingobernabilidad

represión desatada por la dictadura. La resistencia continuó su lucha, pero no en la proporción que habría esperado el controvertido presidente derrocado, mientras que el equipo de Micheletti —una vez repuesto de la sorpresa y de la

burla a su inteligencia y seguridad— se dedicó a cercar a Zelaya en la sede diplomática aprovechando su encierro para capitalizar a su favor la demanda nacional e internacional por un diálogo que realmente condujera a una negociación.

Un golpe en dos etapas y con Plan B

Micheletti y su equipo golpista ha partido de un análisis más cercano a la realidad, que es demasiado evidente. Convencidos de su debilitamiento y del cerco político, diplomático y económico, los golpistas se dedicaron a trabajar en la última semana de septiembre y en la primera de octubre para sacar las mayores ventajas de la presión por un diálogo que ponga fin al régimen *de facto*.

Para los golpistas, el derrocamiento de Zelaya el 28 de junio fue un decisivo, aunque apenas primer paso, para consolidar su proyecto político y económico. Más claro: el destierro de Zelaya y la instauración de un régimen *de facto* encabezado por Roberto Micheletti era la primera etapa de un más amplio golpe de Estado en construcción.

El segundo paso de este proceso serían las elecciones generales del

29 de noviembre, que legitimarían y consumirían lo ocurrido el último domingo de junio. Los golpistas trabajaron sobre este plan, pero siempre se movieron previendo un plan B, en caso de que no funcionara el recurso de las elecciones. Este plan de emergencia –acariciado sin duda por Micheletti– era prolongar al menos por dos años el régimen *de facto* con la composición actual.

El argumento para lograr esto sería una resistencia que impide y boicotea el proceso electoral, y no permite un clima favorable para la celebración en paz de las elecciones. El régimen *de facto* se comprometería a crear durante dos años condiciones para unas elecciones verdaderamente libres, democráticas y transparentes.

La aprobación del decreto de estado de sitio jugó un doble papel: el de factor de negociación en manos de un régimen que se siente débil y necesita reprimir para dialogar y el de factor de presión para que negociadores y mediadores apuraran una salida negociada que garantice inmunidad a los golpistas ante posibles demandas legales. De lo contrario, el régimen imposibilitaría la celebración de las elecciones abriendo así el camino a la prolongación del régimen encabezado por Micheletti.

Dos agujones sobre los golpistas

Los políticos y empresarios que se aliaron para dar el golpe de Estado tienen dos agujones que los obligan a buscar con urgencia una salida. Uno es el proceso electoral: convertirlo en una herramienta que los libre de cualquier amenaza a sus intereses. Para los empresarios de la alianza árabe-criolla esa amenaza tiene un nombre: se llama Chavismo.

Micheletti y su equipo de golpistas jugaron con el diálogo, dilatando la solución, para acercarla lo más posible a las elecciones. Pensaron que la resistencia al golpe no duraría más de unos días, a lo sumo un mes. No esperaban tanta resistencia interna, mucho menos el cerco de la comunidad internacional. Dilatar en el tiempo la solución para llegar a las elecciones no les salió como esperaban, sobre todo porque la población se tomó en serio la lucha de resistencia y porque la comunidad internacional advirtió que con un régimen *de facto* no se reconocerían los resultados electorales. Washington añadió un pequeño pero decisivo ingrediente: quitó las visas de entrada a Estados Unidos a prácticamente todos los funcionarios y empresarios involucrados directamente en el golpe de Estado. Todo esto ha facilitado una salida negociada y ha obligado a

los golpistas a sentarse, muy a su pesar, con el sector zelayista.

El otro aguijón es el económico. Los empresarios están atenazados y el Estado se encuentra sin posibilidades de sacar adelante ningún proyecto económico. Honduras vi-

*la devaluación y la
agudización de la crisis no
sólo se deben a lo ocurrido
en los cien días de régimen
de facto, son también efecto
del mal manejo que el
gobierno de Zelaya hizo ante
la crisis internacional y por
el manejo populista que hizo
con las reservas internas y
las ayudas internacionales*

ve en la exacta definición de la ingobernabilidad. Antes del golpe, el gobierno apenas tenía capacidad para administrar la crisis. Hoy, cuando la crisis internacional está teniendo severos efectos en economías tan frágiles como la hondureña, y la comunidad internacional ha cercado al país suspendiendo la mayoría de ayudas, los empresarios han puesto el grito al cielo, y los mismos que promovieron el golpe y crearon la campaña mediá-

tica de odio hacia Zelaya y «su amo Hugo Chávez» –como suelen decir– son los más ardientes promotores del diálogo porque sus negocios se están hundiendo.

Según los expertos, la economía hondureña está tan afectada que los efectos se sentirán en los próximos años y, como siempre, con más fuerza en los sectores secularmente más deprimidos. De acuerdo a los economistas del Foro Social contra la deuda Externa de Honduras (FOSDEH), la moneda ha alcanzado tales niveles de deslizamiento que en la práctica está devaluado desde el 28 de junio. Si no se efectúa ya la devaluación es sólo por estrictas razones políticas, pero una vez se alcancen acuerdos, la moneda nacional pasaría a cotizarse a finales de año o a comienzos del siguiente de 18,89 a 24 lempiras por dólar. Esto significa que la capacidad adquisitiva y los salarios caerán estrepitosamente, sin que el gobierno ni la empresa privada tengan capacidad para detener la avalancha inflacionaria y el deterioro en la calidad de vida de sectores populares que ya sobreviven en alarmantes niveles de miseria.

La devaluación y la agudización de la crisis no sólo se deben a lo ocurrido en los cien días de régimen *de facto*. Son también efecto del mal manejo que el gobierno de

Honduras: ¡y después de Zelaya, qué!

Zelaya hizo ante la crisis internacional y por el manejo populista que hizo con las reservas internas y las ayudas internacionales. De acuerdo a una encuesta de marzo, 72 de cada 100 hondureños eran del parecer que el gobierno de Zelaya no estaba tomando medidas adecuadas para enfrentar la recesión económica internacional.

Tras el golpe de Estado, la situación empeoró: disminuyeron en más de un 20% las remesas, aumentó el desempleo con despidos masivos en la *maquila*, se perdieron incentivos para la producción agraria, bajó la recaudación de impuestos, se redujeron las reservas nacionales y se congeló o suspendió la cooperación bilateral internacional.

El repudio al golpe de Estado ha sido universal. Nunca se logró tanta unanimidad en la condena y el rechazo internacional como en el caso hondureño. Pero esta unanimidad ya no es tanta cuando se trata de valorar la administración de Zelaya. No es lo mismo repudiar un golpe de Estado violento que tener afinidad o simpatías por quienes han sido las víctimas de ese acto. Querer que toda la gente y sectores que se rebelan contra los golpistas sean zelayistas es como querer que todo el mundo hable una sola lengua o que todo el mundo pertenezca a una misma raza o

a una única religión. Quien une a la rebeldía hondureña no es Manuel Zelaya Rosales, sino el repudio al acto llamado golpe de Estado. Este es el camino para entender

la resistencia es un fenómeno nacional que ha logrado capitalizar descontentos y malestares antiguos, juntando a los sectores organizados tradicionalmente en gremios, sindicatos, asociaciones, frentes de lucha, movimientos sociales de base, movimientos políticos y patronatos, con muchos otros sectores que no han tenido experiencia organizativa social o popular

la identidad de la resistencia y no el otro, que en lugar de dar identidad y cohesión, dispersa y divide.

Una nueva realidad: la resistencia

En estos más de cien días de lucha contra el golpe, las calles, carreteras, puentes, parques, montañas,

veredas y plazas del país han estado llenas de pueblo en resistencia. Pero no toda la resistencia respira por los mismos intereses. Los medios golpistas se afanan en llamar a toda la población que se opone al golpe como resistencia zelayista. Y los liberales zelayistas se afanan en que toda la resistencia se agrupe en torno a la única consigna de «Urge Mel». Sin embargo, nada más alejado de la realidad que una resistencia con un único color, el del zelayismo.

La resistencia es un fenómeno nacional que ha logrado capitalizar descontentos y malestares antiguos, juntando a los sectores organizados tradicionalmente en gremios, sindicatos, asociaciones, frentes de lucha, movimientos sociales de base, movimientos políticos y patronatos, con muchos otros sectores que no han tenido experiencia organizativa social o popular. La resistencia es un fenómeno social que se ha conformado en torno a la demanda política por la restitución constitucional, y que ha logrado articular a antiguos actores sociales y políticos con un nuevo actor social, que es toda esa gente que espontáneamente sale a las calles a manifestarse y a expresar su repudio tanto a la violencia como a los ricos del país. La resistencia es un fenómeno que ha sabido recoger y

despertar una rebeldía contenida y reprimida durante muchos años.

Aún corriendo el riesgo de caer en esquemas simplistas, la resistencia que se ha configurado a cien días del golpe se puede entender en torno a tres dinamismos. El primero es el dinamismo del sector liberal zelayista. Su identidad gira en torno a su indiscutible líder, Manuel Zelaya Rosales. Ha logrado cohesionar a muchas personas, que sin ser liberales, se han sentido cautivadas o subyugadas por un Presidente que rompió moldes, se enfrentó desde dentro como nadie lo había hecho hasta ahora con grupos de poder; un hombre que puso en marcha relaciones internacionales con sectores y países con clara línea de izquierda, y que se puso firme ante el FMI y ante EE UU.

Este dinamismo logró captar a dirigentes de sectores populares y de izquierda, llegando a establecer una línea de alianzas en la que no se sabía dónde terminaba el Partido Liberal y dónde comenzaba la conducción de la izquierda. El dinamismo zelayista ha definido en gran medida la identidad de la lucha, y la palabra siempre improvisada y sugestiva de su líder ha determinado, para bien y para mal, el carácter de las movilizaciones.

El segundo dinamismo es el del sector del movimiento popular de

Honduras: ¡y después de Zelaya, qué!

izquierda. Su identidad gira en torno a una resistencia permanente al modelo neoliberal excluyente, y al bloque latinoamericano que lidera Hugo Chávez. Más que zelayista este dinamismo es chavista, y como Zelaya está con Chávez, se fortalece la alianza entre los dos dinamismos. Este dinamismo es el que aglutina a frentes de lucha como el Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, los poderosos y polémicos gremios magisteriales, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), la Asamblea Popular Permanente de El Progreso (APP), los sindicatos que agrupan a los bananeros y a muchos otros que se asocian a las tres centrales obreras y sindicales que existen en Honduras.

La persistencia, cohesión y organización de la resistencia reside en este segundo dinamismo, aunque también ha mostrado la debilidad que en el país tiene la organización sindical. Esto se expresa, por ejemplo, en que no ha logrado hacer efectiva en todo el tiempo de la lucha en contra del golpe el arma de la huelga general. La débil capacidad de convocatoria de los dirigentes de las centrales y la distancia entre ellos y las bases, dis-

persas y con muy frágil cohesión ideológica, ha sido manifiesta. La vinculación entre este dinamismo con el primero, y especialmente con el partido de izquierda Unifi-

*el tercer dinamismo tendrá
mayor incidencia y
coherencia en la medida en
que se alimente de la
experiencia del segundo
dinamismo, pero sin
dejarse atrapar por una
dinámica excesivamente
«gremialista», que vela más
por los intereses propios que
por los de los sectores más
pobres y no agremiados*

cación Democrática (UD) y con la candidatura independiente que encabeza el veterano dirigente sindical Carlos Humberto Reyes, son muy estrechas y con frecuencia se cruzan y confunden.

El tercer dinamismo es el espontáneo, el de la población, el del *molote* de gentes, unas afines al primer dinamismo, otras afines al segundo, y la mayoría independiente. Esta gente se ha sentido tocada en su conciencia y convierte su rebeldía a la imposición del golpe de Es-

tado saliendo a las calles a protestar o apoyando a quienes salen.

En este dinamismo hay que situar a la gente que se fue vinculando en los últimos meses antes del golpe al llamado Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que surgió de la histórica huelga de hambre de abril-mayo 2008, que enfrentó a los mismos sectores corruptos que hoy conforman la alianza responsable del golpe y sostienen el régimen *de facto*.

Mayoritariamente, este dinamismo tiene que ver con la gente común, que seguramente ha votado por alguno de los dos partidos tradicionales y que es católica o evangélica, pero que no está de acuerdo con la bendición que sus pastores han dado a los golpistas. Esta gente es la que ha salido a las calles a caminar decenas de kilómetros o ha entregado tortillas con cuajada y fresco de tamarindo a quienes salen a caminar. Es pueblo *municipal y espeso* que ante la imposición violenta ha avanzado enormemente en su conciencia ciudadana.

Estos tres dinamismos conforman la realidad que llamamos Resistencia. Cuanto más vinculada esté esa resistencia por el primer dinamismo, menos capacidad de alcanzar una identidad propia tendrá, y cuanto más se unan el segundo y el tercer dinamismo, más

identidad y fuerza popular adquirirá. El desafío está en que el segundo dinamismo –el del sector de la izquierda popular organizada– se pegue más al tercer dinamismo y mantenga mayor autonomía del primer dinamismo. A la vez, el tercer dinamismo tendrá mayor incidencia y coherencia en la medida en que se alimente de la experiencia del segundo dinamismo, pero sin dejarse atrapar por una dinámica excesivamente «gremialista», que vela más por los intereses propios que por los de los sectores más pobres y no agremiados. Cuanto más color de pueblo, de esa *molotera* que ha salido a las calles, tenga la resistencia, mayor capacidad de construirse como Nuevo Sujeto Político tendrá.

Tras el regreso de Zelaya, la tendencia observada es a unirse los líderes del primero con el segundo dinamismo, viendo al *molote* de gente sólo útil para llenar las calles, pero no viéndolos como compañeras y compañeros de camino.

El mejor y el peor escenario

Cualquiera de los escenarios que surja tras la firma de acuerdos entre los polos en conflicto podrá contener la crisis actual, pero no la resolverá ni en el corto ni en el mediano plazo. El más deseable de los escenarios es el que le hiciera

frente a la crisis con acuerdos que abrieran un proceso permanente de diálogo en torno al Estado con la participación de sectores que no sean sólo empresariales y de los partidos políticos, sino vinculados con la resistencia y la comunidad internacional, hasta desembocar en la construcción de un nuevo pacto social.

El peor de los escenarios es el que se reduzca a acuerdos atrapados por el cortísimo plazo de las elecciones, en el que los oportunistas de siempre aprovechen la salida de la crisis para alcanzar mayores cuotas de poder. Excluimos el escenario que resultase del fracaso rotundo del diálogo y que abriera la continuidad en el tiempo del golpe de Estado michelettista, aun cuando fuera ya sin Micheletti.

Escenario 1: gana Pepe Lobo. Un escenario sería el de acuerdos que restituyen a Zelaya en el gobierno, aunque con las manos atadas y con el objetivo de legitimar las elecciones de noviembre, en donde saldrá electo el candidato nacionalista Porfirio Lobo Sosa, expresión de la alianza golpista y nuevo régimen de un conductor de un régimen que tendría claros rasgos de autoritarismo.

En este escenario, sólo se estarían ensamblando las mismas viejas piezas de una institucionalidad

sometida a las arbitrariedades de los propietarios de los partidos políticos y los dirigentes empresariales. Este escenario dejaría instalado el conflicto, las elecciones quedarían chamuscadas, la presión de la resistencia seguiría siendo un factor decisivo en la vida del país, y el gobierno siguiente debería acentuar los mecanismos de coerción y de presión para lograr mantenerse a flote.

Escenario 2: gana la resistencia.

Un segundo escenario sería el surgido de acuerdos que restituyen a Zelaya al gobierno, siempre mantenido, pero respaldando en las escasas semanas que restan antes de los comicios, a uno de los dos candidatos de izquierda –César Ham, del Partido Unificación Democrática, o Carlos H. Reyes, candidato independiente– con el compromiso central de promover una Constituyente para impulsarla como principal demanda política de la resistencia en el siguiente ciclo político.

En este escenario se estaría definiendo la resistencia como partido político a la sombra de Zelaya, con todo y su sombrero, como símbolo de la ruptura del sector zelayista con los liberales y de la alianza de un sector liberal con los sectores de la izquierda tradicional. Sería una especie de partido popular

zelayista de liberación nacional, una extensión o traslado a la izquierda de una de las corrientes internas de los dos partidos tradicionales cuya característica princi-

*el escenario deseable
es que los acuerdos
aseguren el retorno a la
constitucionalidad con el
reintegro de Zelaya a la Casa
Presidencial, pero dejando
abiertas las puertas
para que una comisión
internacional de la verdad,
realice una seria e imparcial
investigación sobre abusos
de autoridad, delitos
públicos, de lesa humanidad
y de violación a los derechos
humanos, con el fin de que
se pueda avanzar a una
reconciliación basada
en la verdad*

pal ha sido hacer girar todo el quehacer partidario en torno a la figura de un caudillo.

En el caso improbable de un triunfo de esta alianza de la izquierda

con un sector disidente del liberalismo, el candidato ganador –César Ham o Carlos H. Reyes– impulsaría la conformación, entre el primero y segundo año de administración pública, de la Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo como presidente de la misma a Manuel Zelaya Rosales.

Escenario 3: guerra civil. Un tercer escenario nacería de acuerdos que restituyen a Zelaya en el gobierno sobre la base del pacto de San José: amarrado a no convocar a ninguna Cuarta Urna ni a una Constituyente, y subordinado a una especie de gobierno transitorio de conciliación nacional. Conforme a un acuerdo previo, la resistencia ejercería una poderosa presión hasta obligar al Ejecutivo a atender la demanda de convocatoria a una Constituyente, rompiendo de esa manera los acuerdos firmados.

En este escenario se correría el grave peligro de ingresar a una agudización extrema del conflicto, puesto que Zelaya Rosales optaría por atizar una convulsión social y política que llevaría a que la comunidad internacional ejerciera en su contra un cerco diplomático mucho más radical que el ejercido contra el régimen *de facto*. Podrían sentarse las condiciones para no celebrar elecciones a fi-

nales de noviembre y abrirse las puertas a un conflicto violento, de guerra civil, con consecuencias impredecibles.

Escenario 4: otro gobierno. Un cuarto escenario –siguiendo ideas peregrinas– tendría en la base unos acuerdos que llevarían como Presidente de transición a un tercer protagonista, pudiendo ser éste una persona que logre consenso, tanto del sector zelayista como del sector michelettista. Podría ser uno de los Rosenthal, liberal judío que formó parte del equipo de campaña de Roberto Micheletti. Uno de su clan fue Ministro de la Presidencia con Zelaya, y en la coyuntura del golpe mantuvo una clara distancia de Micheletti y una línea editorial promotora del diálogo en base a los Acuerdos de San José. Aunque es éste un escenario muy peregrino, tiene lógica porque los Rosenthal han tenido el eterno mote de *gatos*: en cualquier coyuntura de los últimos cuarenta años, por muy conflictiva que haya sido, siempre han caído de pie.

Escenario deseable: pacto social

El escenario deseable es que los acuerdos aseguren el retorno a la constitucionalidad con el reintegro de Zelaya a la Casa Presiden-

cial, pero dejando abiertas las puertas para que una comisión internacional de la verdad, realice una seria e imparcial investigación sobre abusos de autoridad, delitos públicos, de lesa humanidad y de violación a los derechos humanos, con el fin de que se pueda avanzar a una reconciliación basada en la verdad y que garantice reparación y resarcimiento a la dignidad perdida y a los daños sufridos en este conflicto promovido por cúpulas políticas y empresariales. No se deberían aceptar acuerdos sobre la base de la impunidad para los violadores y responsables de la feroz represión ejercida en los meses del golpe de Estado.

Las mujeres han denunciado los atropellos y acosos sexuales sufridos en las diversas represiones ejecutadas por la policía y el ejército. El caso de la joven que en la manifestación del 14 de agosto, en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, fue capturada, trasladada violentamente a un lugar solitario y violada por cuatro policías, no puede quedar en la impunidad por muchos que sean los acuerdos de reconciliación que se firmen en nombre del amor a la paz y a la patria. La patria, la paz y la justicia sólo pueden amarse si se garantiza a tantas personas mancilladas, como esta joven, que

los ejecutores materiales e intelectuales de los delitos serán juzgados por tribunales nacionales y hasta por la Corte Internacional de Justicia.

En este escenario deseable, Zelaya, como Presidente constitucional, legitimaría las elecciones del 29 de noviembre, pero no pondría su acento en ellas, sino en la construcción de un Pacto Social con la participación de partidos políticos, empresarios, sectores de la resistencia nacional y sectores de la sociedad civil, quienes aportarían elementos que garanticen la puesta en marcha de un proyecto de país en asuntos agrarios, medioambiente, economía solidaria y seguridad alimentaria, salud, educación, vivienda, cultura, seguridad, medios de comunicación, política, partidos políticos, legislación actual, Estado de Derecho y relaciones con la comunidad internacional.

Este proyecto de Pacto Social debe ser entregado al nuevo gobierno al momento de su toma de posesión, y en torno al mismo definir el buen o el mal gobierno, iniciándose así un proceso de vigilancia social que protagonicen los sectores convocados para diseñar el proyecto de país. En torno a él se po-

drían configurar las propuestas de los partidos políticos para el siguiente proceso electoral.

Este Pacto Social en torno a un proyecto de país constituiría, en sus contenidos, el proceso a seguir hasta llegar a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente, una demanda que surgió en el reducido círculo de la administración de Zelaya, que luego se convirtió en la demanda de los sectores populares de la izquierda hondureña, y que tras cien días de resistencia en contra del golpe de Estado se ha convertido en una demanda auténticamente nacional.

Pasar de la consigna de la Constituyente a ponerle carne y contenido a través de un Pacto Social y un Proyecto de País es, sin duda, la tarea política fundamental en la transición hacia una nueva administración pública. Saber impulsarla, construirla y socializarla con toda la población hondureña debería ser el quehacer y la identidad de la resistencia nacional, este nuevo sujeto político brotado de esta tormentosa y prolongada coyuntura de golpe de Estado. Tal vez así rompemos por fin con el modelo bipartidista hondureño. ■